

*Cecilia Gutiérrez Lázaro
Antonio Santoveña Setién*

Concebido como una necesidad ante el creciente estado de indefensión a que se veían abocados los trabajadores por efecto de la aparición de procesos productivos cada vez más modernos y exigentes, el asociacionismo obrero iba a iniciarse en Cantabria (al igual que en otras zonas de España) a lo largo del siglo XIX. Esta circunstancia, que comenzó materializándose en la fundación de sociedades de socorros mutuos, primero, y de cooperativas de producción y consumo, después, alcanzaría su mejor exponente en nuestra región desde la década de los años ochenta de la referida centuria con el nacimiento de entidades de resistencia.

Los organismos de este último tipo, integrados por operarios pertenecientes a un mismo oficio dentro de una población, tenían como propósito crear un fondo común con el que hacer frente a los períodos de cese voluntario de la actividad laboral causados por las arbitrariedades de los patronos. Gracias a este procedimiento (cuyo fundamento residía en las aportaciones que realizaban los socios a través de las cuotas) se confiaba en forzar la adopción de acuerdos colectivos que reemplazasen a los tradicionales de carácter individual, en los que se hacía manifiesta la posición de extrema debilidad de los proletarios con respecto a los empresarios.

Habida cuenta de las ventajas de esta novedosa fórmula de asociación, pero también de las limitaciones que evidenciaba (derivadas, en especial, de la adscripción de cada organismo a un único oficio y localidad), no iba a tardar en plantearse la conveniencia de trascender ese reducido ámbito de actuación. Dicho proyecto, analizado durante un congreso obrero que tuvo lugar en Barcelona a mediados de agosto de 1888, se concretó en la creación de una macroentidad que, denominada Unión General de Trabajadores, aspiraba a encuadrar al mayor número posible de sociedades de resistencia de toda España con vistas a favorecer la mejora de las condiciones laborales del conjunto de la clase asalariada.

Tales directrices, suscritas por colectividades obreras de varios puntos del país, iban a contar, asimismo, con la adhesión de algunas asociaciones defensivas de la capital montañesa desde principios de los años noventa. Y es que el clima de entusiasmo proletario generado por la instauración, en 1890, de la Fiesta del Trabajo fue lo suficientemente intenso como para que más de una decena de entidades, siguiendo la pauta trazada por la de operarios de las artes gráficas (que, creada en 1883, era la más antigua de Santander), formalizasen su ingreso en la U.G.T., bien a título individual, bien en su calidad de miembros del Centro Obrero de la ciudad (cuya constitución se verificó en 1891).

Esta incipiente efervescencia societaria iba a adquirir la máxima magnitud hasta entonces conocida en suelo cántabro merced a la inauguración, en 1893, de unas amplias instalaciones en la santanderina calle de las Animas. El disfrute de las mismas, que pronto se convirtieron en referente básico para la población trabajadora, coincidió, sin embargo, con el inicio de una crisis económica. De resultados de los efectos de ella (aumento del paro, contracción salarial y encarecimiento del costo de la vida), el movimiento obrero entró en una fase decadente a consecuencia de la cual fueron disolviéndose casi todas las colectividades que le configuraban.

La tendencia regresiva así abierta, prolongada por espacio de varios años, iba a terminar en 1898, cuando, con motivo de la derrota militar ante Estados Unidos, nuestro país experimentó una profunda conmoción. Fruto del cuestionamiento del orden socio-político vigente a que la misma dio lugar, se produjo un resurgir obrerista. Dentro de Cantabria, semejante revitalización tuvo sus elementos impulsores en las ya citadas instalaciones de la calle de las Animas, en una campaña de propaganda y en la fundación del periódico *La Voz del Pueblo*. A estos factores habría que añadir, además, el comienzo de una etapa de crecimiento facilitada por la puesta en marcha de un nuevo modelo económico, que se centraba en la explotación minera a gran escala y en el desarrollo de una industria moderna.

Inmerso, pues, en esta coyuntura peculiar, y estimulado por el incremento en el volumen de población asalariada que se estaba registrando, el movimiento obrero montañés iba a conocer durante el tránsito del siglo XIX al XX una expansión notable. Testimonio de ese fenómeno fueron tanto la reorganización y constitución de muchas sociedades de resistencia en Santander como la entrada de parte de ellas en la U.G.T. Los avances descritos se completaron, a la vez, con un aumento importante de la conflictividad laboral, que alcanzó unos niveles hasta aquel momento inéditos en el marco territorial considerado.

En medio de esta dinámica expansiva (que estuvo jalonada por diversas mejoras en las condiciones laborales del proletariado), los líderes societarios de la capital cántabra iban a valorar la posibilidad de dotarse de

una estructura defensiva más compleja. Este designio se consumó en 1901, con ocasión del nacimiento de la Federación Local de Sociedades Obreras, que, ideada con el fin de aglutinar a todas las colectividades de oficio de la ciudad, se vincularía desde su congreso fundacional a la U.G.T., en la confianza de proporcionar así la máxima proyección geográfica a sus actividades.

Al margen de reportar beneficios directos (reducción de la jornada, incremento retributivo y trato más humano en bastantes empresas) debido a la mayor capacidad negociadora que confirió a la clase trabajadora, la Federación Local de Santander iba a coadyuvar, también, a la propagación del asociacionismo obrero por otras zonas de la provincia. Dicha circunstancia se puso de manifiesto en núcleos industriales o mineros como Torrelavega, Castro Urdiales, El Astillero, Cabárceno, Mioño, Santoña, Heras, Obregón y Pámanes. En virtud de este proceso, Cantabria quedaría erigida como uno de los principales enclaves ugetistas de España.

La situación expuesta iba a modificarse, no obstante, entre 1903 y 1905, cuando los intentos anarquistas por menoscabar al socialismo, el inicio de una recesión económica (con sus secuelas de desempleo y encarecimiento de las subsistencias), amén de la pérdida de dos huelgas importantes por los cargadores del muelle de Santander (que integraban la mayor entidad defensiva de la región) confluyeron para provocar la quiebra de la estructura societaria construida en los años anteriores. Así las cosas, el obrerismo montañés se vio sumido en un estado de abatimiento tal, que numerosos patronos estuvieron en condiciones de revocar parte de los logros que hasta entonces habían conseguido sus operarios.

Pese a los esfuerzos de propaganda y captación (sobre todo a través de la Sección Artística) desplegados por los dirigentes obreros de Cantabria, el panorama indicado aún iba a perpetuarse durante varios años, hecho que se tradujo en una escasa actividad societaria y en una reducción de la conflictividad laboral. Sería necesario aguardar al verano de 1909 para que la gran alteración social causada por los sucesos de la *Semana Trágica* actuase como acicate de cara a la recuperación. Esta se fue concretando en la aparición de diversas colectividades de defensa (así como de algunas cooperativas de producción y consumo vinculadas a ellas) en Santander, El Astillero, Torrelavega, Camargo, Obregón, Liaño, Guarnizo, Boo-Maliaño, Peñacastillo, Santoña y Cabárceno que, si bien no se incorporaron en su totalidad a la U.G.T., quedaron dentro de su ámbito de influencia gracias al fuerte ascendiente ejercido por la Federación Local santanderina.

El rebrote obrerista de esta manera acaecido iba a persistir hasta mediados de 1914, en que la crisis económica originada por el estallido de la I Guerra Mundial puso fin al nuevo período de expansión. Luego de un paréntesis regresivo de cerca de dos años, el propio recrudecimiento de los problemas de paro y carestía de la vida que había suscitado la contienda bélica impulsaría desde 1916 a la clase asalariada a concentrar sus energías en la tarea de reforzar sus mecanismos defensivos. En el caso cántabro, esta aspiración se reflejó tanto en la creación de varias sociedades (en Santander, Torrelavega, Barreda, Reocín, Heras, Nueva Montaña y Cajo) como, muy especialmente, en la fundación por los obreros en metal del primer sindicato de industria de la provincia.

Aunque la flamante modalidad asociativa se inició en nuestra región con el nacimiento en 1917 del Sindicato Obrero Metalúrgico Montañés (que pretendía agrupar a todos los trabajadores de ese sector sin ninguna distinción de categoría profesional, empresa o localidad), los primeros momentos de su existencia iban a estar marcados por la decisión de los máximos responsables ugetistas de promover una huelga general en España con objeto de reclamar la democratización del país. Y es que el fracaso final de dicho conflicto (que se verificó en agosto de aquel año) supondría no sólo la frustración del propósito perseguido, sino, también, la interrupción temporal de cualquier actividad obrerista debido a la durísima represión dispuesta por las autoridades del Estado.

En todo caso, el restablecimiento de la normalidad iba a abrir, desde 1918, una fase de grandes convulsiones sociales. Las mismas, agudizadas por los reajustes económicos que siguieron al término de la I Guerra Mundial y por los cambios que trataban de introducir en el campo laboral instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, se manifestaron en una proliferación de conflictos. Estos, cuyas causas inmediatas se repartían entre la aspiración de aumento retributivo y el deseo de que le fuesen reconocidos determinados derechos al proletariado, alcanzarían su mejor expresión en la huelga que sostuvieron durante casi dos años los empleados de Trefilerías Quijano, en Los Corrales de Buelna.

Coincidiendo con este período de agitación, el movimiento obrero de la capital cántabra iba a entrar en crisis por efecto de un nuevo enfrentamiento entre ugetistas y anarquistas, que, revitalizados desde hacía algún tiempo, habían ido ingresando en las entidades afectas a la Federación Local santanderina. Aparte de conllevar un debilitamiento organizativo y una disminución en el número de afiliados, la pugna de ambas corrientes por intentar granjearse el apoyo de los asalariados ocasionó su separación en dos opciones muy diferenciadas. Ello culminó en 1921, cuando las sociedades vinculadas a la U.G.T. abandonaron la Federación Local (que se proclamó anarquista) para configurar la Federación Obrera Montañesa e instalarse, ya en 1922, en un edificio de la calle de Magallanes, que quedó convertido en Casa del Pueblo.

A pesar de que el organismo de esta forma fundado había sido concebido para acoger a colectividades obreras de toda la región, tal propósito no iba a cumplirse hasta los años de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). De hecho, el proceso de expansión geográfica registrado en esa época fue lo bastante intenso

como para atraer hacia la Federación Obrera Montañesa a la mayoría de las sociedades cántabras. Esta labor integradora, favorecida por varias campañas de propaganda y, en especial, por las actividades culturales con que los dirigentes proletarios trataron de eludir las restricciones gubernamentales, se traduciría, a la altura de 1928, en la cifra de 39 secciones (entre las que se encontraban las 6 que pertenecían al Sindicato Obrero Metalúrgico Montañés) adscritas a la macroentidad provincial, distribuyéndose entre las principales áreas fabriles y mineras del ámbito estudiado.

En consonancia con la táctica seguida por la U.G.T. a escala nacional, la Federación Obrera Montañesa iba a participar de modo activo en la organización corporativa del Estado, ya ocupando las vocalías obreras de los comités paritarios, ya solicitando la instauración de tribunales industriales en la región o enviando representantes al Instituto Nacional de Previsión. Esta línea de comportamiento de los ugetistas cántabros no obstó, sin embargo, para que en algún caso tuviesen que recurrir al conflicto, como sucedió durante 1928 en El Astillero, donde las diferencias entre patronos y asalariados provocaron un enfrentamiento entre los responsables de la Federación Obrera Montañesa y el gobernador civil que se saldaría con numerosas detenciones, la clausura del Centro Obrero de la referida localidad y la intervención personal del ministro de Trabajo para solucionar la huelga.

Con ser claro el acatamiento de la Dictadura primorriverista por parte de la Federación Obrera Montañesa, la caída de dicho régimen, a comienzos de 1930, iba a suscitar en la macroentidad cántabra un alineamiento en favor de las fuerzas políticas que propugnaban el establecimiento de un orden democrático y, con él, la consecución de mejoras para la clase trabajadora. Tal actitud se pudo observar tanto en el apoyo dispensado a la huelga general que siguió a la insurrección de Jaca (producida en diciembre de 1930) como en la adhesión a los partidos antimonárquicos que concurrieron a las elecciones municipales de abril de 1931.

El entusiasmo causado por la proclamación de la II República iba a fomentar una intensificación de la actividad reivindicativa a lo largo del año 1931. La misma, reflejada en un aumento del número de conflictos y en la considerable magnitud que éstos adquirieron en diversos casos, alcanzaría su punto culminante en septiembre con la declaración de una huelga general motivada por la muerte de un miembro de la Sociedad de Trabajadores del Muelle de Santander a consecuencia de un enfrentamiento entre obreros que tuvo lugar en el puerto de esa ciudad.

En pleno auge expansivo, la Federación Obrera Montañesa iba a albergar en su seno a un total de 91 secciones, pertenecientes a 26 poblaciones de la región. Además de saturar la capacidad de la sede de la calle de Magallanes por falta de espacio, el avance del asociacionismo en Cantabria se materializó en dos hechos: por un lado, en la determinación de celebrar los congresos de la Federación Obrera fuera de la capital (circunstancia que se iniciaría en las postrimerías de 1931 con el desarrollo de uno en Reinosa); y, por otro, en el acuerdo (adoptado en esa misma cita congresual) de remunerar al secretario de la organización (cargo que recayó en Antonio Ramos), ya que la gran cantidad de trabajo que llevaba consigo la administración de la estructura defensiva que nos ocupa exigía dedicación absoluta.

Los progresos logrados por el proletariado cántabro desde el advenimiento de la República iban a quedar diluidos, empero, en el ambiente de inestabilidad social que se percibió a partir de 1932. Entre los factores que propiciaron semejante situación cabe destacar la renuencia de las patronales a aceptar el modelo de conciliación corporativa basado en los tribunales mixtos o la reanudación de las fricciones entre ugetistas y anarquistas (tras un nuevo resurgir de estos últimos). Ante dichas incidencias, la Federación Obrera Montañesa intentó consolidar su posición por medio de un fortalecimiento del poder decisorio de su Comisión Ejecutiva y de una burocratización de los mecanismos a través de los que sus secciones hacían frente a los conflictos laborales.

Las tensiones sociales iban a revestir aún mayor dimensión desde 1933 debido al empeoramiento de la coyuntura económica, a la constante actividad de anarquistas y comunistas, así como a un incremento en el número de huelgas. Todas estas dificultades cobraron, por añadidura, una intensidad especial a finales de aquel año por efecto de la llegada de la derecha al Gobierno. En estas condiciones, la Federación Obrera Montañesa se vería en la necesidad de poner en práctica una doble estrategia en virtud de la cual, a la vez que manifestaba su descontento ante la política social de Alejandro Lerroux, trató de mantener a sus afiliados dentro de los cauces tradicionales de moderación.

Esta manera de proceder, verificada durante el año 1934, iba a prolongarse, incluso, después de la revolución de octubre; y ello a pesar de la quiebra que la misma supuso para la línea de crecimiento sostenido que la Federación había ido experimentando desde su nacimiento. De esta forma, la ratificación de la actitud legalista que siempre había significado a la macroentidad obrera cántabra, con su subsiguiente correlato de apego a las soluciones negociadas e interés por cuanto concernía a la organización y sus componentes, se proyectaría en los meses ulteriores tanto en los intentos de recomponer el entramado defensivo como en el auxilio a los asalariados que habían sido víctimas de la represión. Ambos esfuerzos se completaron, finalmente, con una desconfianza hacia anarquistas y comunistas, por considerarlos responsables de la descoordinación de la clase trabajadora, amén de promotores de peligrosas iniciativas incontroladas.

Convencida de las virtualidades de la conducta señalada, ni siquiera el estallido de la Guerra Civil, en julio

de 1936, iba a conseguir radicalizar las directrices de la Federación Obrera Montañesa. Por el contrario, merced a su participación en los órganos de gobierno que se fueron creando y en la economía de guerra, pudo continuar arguyendo que cualquier acción defensiva por parte del proletariado había de asentarse necesariamente en el respeto a la legalidad y el orden. Estas premisas, aplicadas a una situación excepcional, como la producida por la contienda bélica, explican que todas las actuaciones del ugetismo cántabro en ese contexto (incluidas las incautaciones de industrias que llevó a cabo en determinados sectores) tuviesen como referente más inmediato el servicio a la República.

Con todo, el formidable impacto causado por la confrontación armada sobre el conjunto de la sociedad española iba a alterar en grado sumo el funcionamiento ordinario de la Federación Obrera Montañesa. Así, la presencia de la mayor parte de sus afiliados en el frente y las múltiples tareas que hubieron de realizar sus debilitadas secciones en la retaguardia con el fin de atender las necesidades que comportaba la lucha por la democracia impidieron que se pudiera mantener la normalidad. Esta perturbación de la dinámica habitual, dilatada por espacio de 13 meses, concluiría en agosto de 1937 con la entrada de las tropas franquistas en Cantabria.

De este modo, alcanzaba también su término en nuestra región una experiencia que, surgida aproximadamente medio siglo antes, había tenido como objeto velar por los intereses de la población obrera. Dicha iniciativa, cuyo desarrollo fue posible al amparo de la cobertura dispensada para todo el país por la U.G.T., se distinguió a lo largo de su devenir histórico por un permanente carácter moderado, negociador y pacífico. El mismo, definido, en un principio, por numerosas sociedades de oficio y corroborado, luego, por diversos sindicatos provinciales de industria, supuso un cambio profundo en la realidad socio-económica de Cantabria, ya que marcó la irrupción del proletariado como fuerza emergente. Gracias a ello, y aunque sólo fuese por un tiempo limitado, los integrantes de la mencionada clase pudieron gozar de parte del protagonismo que les correspondía por su amplitud cuantitativa y aportación global.

UGT CANTABRIA

INTRODUCCIÓN

El libro que se dispone a leer en este momento es el fruto de varios años de trabajo desarrollado por su autora por encargo de la Unión General de Trabajadores en Cantabria, una organización sindical con más de cien años de antigüedad que un día decidió llegado el momento de volver su mirada hacia atrás y recuperar para las generaciones presentes y las venideras la historia de unos hombres y mujeres que entregaron sus vidas a la causa de la libertad y del “socialismo” como gustaban decir ellos mismos cuando se referían a su actividad en pos de los derechos de los trabajadores y la libertad sindical.

El título de la obra en si mismo recuerda la existencia de otro trabajo por lo cual es fácil deducir que el volúmen actual es la continuación de una primera labor de investigación que ahondó en el conocimiento de la misma organización entre 1888-1937. La presente aborda el análisis del período que transcurre entre el final de la Guerra Civil en Cantabria, agosto de 1937, y aproximadamente 1972, año en el que se produce el retorno de dirección de la Unión al interior de España después de más de treinta años de residencia en Toulouse, en Francia.

Propiamente visto la obra distingue dos momentos con claridad, el período de la represión que se produjo en la inmediata posguerra y el de la actividad clandestina de los militantes de la Federación Obrera Montañesa con el objetivo de reconstituir sus organizaciones sindicales y realizar un tipo de oposición activa frente al régimen dictatorial de Franco. A su vez cada una de ellas ha sido estructurada formalmente en varios capítulos para poder abordar con claridad los distintos aspectos que se superpusieron en el tiempo en unos casos y distinguir las etapas que se sucedieron en otros.

La represión y sus consecuencias son así explicadas en los tres primeros capítulos para poder desmenuzar por separado las cuatro complejas facetas en las que la autora ha estimado se puede segmentar el proceso represivo sin llegar a perder la percepción global de lo sucedido en su transcurso. El primero de los tres centra su interés en la inmediata consecuencia que la represión generó entre los militantes de los sindicatos ugetistas, esto es el exilio. De tal manera que se procura describir cual fue el periplo común al grueso de los ugetistas montañeses que en el momento de ver que se perdía la provincia decidieron abandonar su patria para poder conservar la vida, una circunstancia que por cierto no se llegó a cumplir en muchos casos. El segundo aborda la persecución que sufrieron los que se quedaron por propia voluntad o porque no lograron cruzar la frontera, desde los primeros momentos en que se fusiló sin control hasta la definitiva institucionalización de una violencia que por aparecer vestida de legalidad no dejó de ser tan brutal e ilegal como la que se ejerció en los primeros días tras la caída de la región. El tercero quizás sea el capítulo más novedoso en cuanto a que rara es la ocasión en la que se ha tratado el tema de las pérdidas económicas sufridas por las organizaciones de izquierdas en aquel período, hemos de agradecer la colaboración que hemos recibido en este orden del departamento de Bienes y Patrimonio de la U.G.T. Nacional, puesto que pusieron a nuestra disposición toda la información que llevaban años recopilando con el fin de reclamar sino la devolución de todo el patrimonio que les fue incautado si al menos algún tipo de compensación económica. En este capítulo se aborda también, sucintamente, como en el colmo de la paranoia represiva la Dictadura trató de manipular incluso la memoria que conservaron los militantes sobre sus organizaciones y los dirigentes sindicales.

A continuación los siguientes cuatro capítulos se adentran en las actividades que desarrollaron los afiliados de la Federación con el fin de reconstruir sus organizaciones tanto en el exilio como en el interior. Se analiza la participación de los ugetistas cántabros en la creación de la UGT en el exilio francés, sus relaciones con los militantes y líderes sindicales que se refugiaron en México y por supuesto las redes clandestinas que desarrollaron para mantener el espíritu vivo de la organización en el interior. En ellos se describe su funcionamiento y las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse durante los cerca de cuarenta años en los que la Dictadura impuso su ley a todos los españoles.

Además y como complemento a la narración se ha incorporado un amplio capítulo de Apéndices para que el lector pueda acceder a documentación emitida por las organizaciones en esa época sin intermediación y saque sus propias conclusiones en torno a su contenido.

Para finalizar dedicar unas líneas de agradecimiento a todas aquellas personas que en el transcurso de la realización de este trabajo han apoyado con sus conocimientos y trabajo a la autora; al personal de archivos y bibliotecas que facilitaron la localización de la documentación y muy especialmente a los miembros de la familia Calzada porque me abrieron las puertas de sus hogares y me dejaron curiosear sin tasa en el maravilloso archivo que conservan en Toulouse; a los descendientes de Ramón Gallut y de otros dirigentes de la UGT, tanto en la clandestinidad como en el exilio, como los de Avelino Ceballos, Laureano Gutiérrez o Antonio Cuadra. Así mismo, quiero dar las gracias a aquellos que aún disfrutaban de la vida a pesar de los sufrimientos que padecieron y me abrieron las puertas de su memoria, me refiero a Fernando Acebal Laheras, Pedro Ruiz San Emeterio y su esposa, o Cosme Cordero Sánchez, entre otros. El capítulo de agradecimientos le hago extensivo a Cesar Tolosa Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria quien permitió que consultara los expedientes que se conservan en el Archivo de la Audiencia Provincial de Santander. Finalmente a la Unión General de Trabajadores de Cantabria por facilitarme el trabajo, franquearme el acceso a algunos depósitos de documentación que hasta el momento habían estado cerrados para los historiadores en la región y manifestar un respeto sin tacha por el trabajo científico.